



POLÍTICAS DE LAS IFI PARA UNAS ECONOMÍAS EQUITATIVAS Y SOSTENIBLES

Declaración de la Agrupación Global Unions a las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en 2017 Washington, 13-15 de octubre de 2017

Introducción

1. El crecimiento económico mundial ha registrado recientemente una ligera mejora en comparación con 2016, pero en muchas regiones los trabajadores y trabajadoras siguen enfrentándose a elevados niveles de desempleo y subempleo, además del estancamiento de sus salarios. La Agrupación Global Unions¹ insta a las instituciones financieras internacionales a centrarse en la creación de empleos de calidad, la extensión de la protección social, una transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, y la reducción de las desigualdades. El movimiento sindical está inquieto por el incremento del nacionalismo de extrema derecha en numerosos países, en parte debido a una falta de confianza en el sistema económico mundial. Las IFI deberían sumarse a aquellos que reclaman reglas más justas en los acuerdos sobre comercio e inversiones, en lugar de fomentar una liberalización que refuerce aún más los derechos de los inversores a expensas del resto.

2. La declaración de la Agrupación Global Unions propone detalladas recomendaciones de acción por parte de las IFI, destinadas a restaurar la participación del trabajo en los ingresos nacionales y reducir la desigualdad de ingresos y riquezas, obtener progresos respecto a la igualdad de género y lograr una transición justa hacia una economía sostenible. La declaración critica al Banco Mundial por su inapropiada promoción de las asociaciones público-privadas en los países en desarrollo e insta al FMI a cambiar su política de favorecer redes de seguridad social focalizadas en lugar de promover la protección social universal. Incluye asimismo recomendaciones para asegurar la aplicación efectiva e integral del nuevo requisito crediticio respecto a normas laborales del Banco Mundial, que entrará en vigor en 2018.

Salarios estancados, persistencia de un alto desempleo y subempleo

3. En las actualizaciones a mitad de año de sus previsiones económicas mundiales, tanto el FMI como el Banco Mundial preveían un crecimiento ligeramente superior para 2017 y 2018 en comparación con 2016, que había registrado la tasa más baja

¹ La Agrupación Global Unions está integrada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que cuenta con 181 millones de miembros en 163 países; las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), que representan a sus respectivos sectores a nivel sindical internacional (AIAE, FIP, ICM, IE, IndustriALL, ISP, ITF, UITA y UNI); y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC).

de crecimiento global desde la Gran Recesión de 2009. No obstante, la previsión de “firme recuperación” anunciada por el FMI está resultando muy dispar. Tras una década de recesión y crecimiento lento provocados por la austeridad, no se espera que la eurozona supere el 2 por ciento de crecimiento anual en 2017 y 2018, y la tasa de incremento será aún menor en el Reino Unido. Las previsiones de crecimiento para los EE.UU. han sido ajustadas a la baja en el 2,1 por ciento para ambos años, como consecuencia de la incertidumbre respecto a las direcciones políticas.

4. En las economías emergentes y en desarrollo, el panorama es considerablemente desigual, pese a una mejora general este año respecto a 2016. El FMI prevé que el crecimiento en América Latina y el Caribe se situará en apenas 1,0 por ciento en 2017. Las tasas de crecimiento en el África subsahariana y los países emergentes y en desarrollo de Asia mostrarán los niveles más bajos desde los años 1990, si exceptuamos la recesión de 2016.

5. Incluso con un crecimiento ligeramente superior en 2017, la situación de los trabajadores y trabajadoras no mejorará sensiblemente. En muchas regiones los trabajadores y trabajadoras siguen enfrentándose a elevados niveles de desempleo y subempleo, además del estancamiento o una disminución de sus salarios. Informes publicados por la Organización Internacional del Trabajo identifican una constante desaceleración del crecimiento salarial desde 2012 en los países en desarrollo y emergentes, y prevén un modesto incremento en la tasa de desempleo mundial para 2017 debido a un deterioro en las economías emergentes (*Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017; Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017*). La OIT estima además que en 2017 apenas se registrarán mejoras marginales para aquellos situados en la escala de ingresos inferior. Cerca del 43 por ciento de los trabajadores/as en todo el mundo seguirán estando en una situación de empleo vulnerable y casi 29 por ciento serán “trabajadores pobres”. Una integración justa y efectiva de los migrantes y refugiados en los mercados de trabajo es también una preocupación clave, dado que estas poblaciones suelen ser vulnerables al desempleo, a tener empleos precarios y a la exclusión social.

6. Recientes previsiones de las IFI señalan que los acontecimientos políticos de los últimos 18 meses podrían complicar el logro de una vía de crecimiento sostenible para la economía mundial. El aumento del nacionalismo de extrema derecha en numerosos países es sumamente preocupante para los sindicatos del mundo entero, pero la respuesta de los responsables políticos no debería ser ignorar la creciente falta de confianza en el sistema económico global. Durante años, algunas instituciones internacionales, incluidas las IFI, han desestimado los costos del ajuste de la liberalización del comercio y las pérdidas sufridas por un número considerable de trabajadores y trabajadoras como consecuencia de los tratados de comercio e inversión. Intensificar la liberalización del comercio e incrementar el poder del capital privado frente a las comunidades locales y los trabajadores no es la mejor vía para salir adelante.

7. El FMI y el Banco Mundial deberían decantarse por reequilibrar los derechos y obligaciones de los inversores en los acuerdos comerciales y de inversión, apoyando la inclusión de disposiciones laborales vinculantes, basadas en las normas de la OIT, dejando de lado los mecanismos de solución de conflictos inversor-Estado que socavan el derecho de los Gobiernos a regular. Para responder a la ausencia global de demanda agregada, crecientes desigualdades y el desafío del cambio climático, la Agrupación Global Unions insta a las IFI a apoyar un amplio programa de inversión pública en infraestructura eficiente desde el punto de vista energético y servicios públicos de calidad, además de incrementos salariales coordinados.

Las operaciones de las IFI han de ajustarse a su retórica contra la desigualdad

8. La creciente atención prestada por las IFI a las consecuencias negativas de la desigualdad de ingresos y de riqueza y sus causas es muy de agradecer. El Banco Mundial ha hecho hincapié en medidas para asegurar una distribución más igualitaria de los ingresos, una condición necesaria para el logro de la meta 1.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la erradicación de la extrema pobreza, así como la meta 10.1 de los ODS que aspira al aumento de los ingresos del 40% más pobre (*Pobreza y prosperidad compartida*, octubre de 2016). El FMI ha publicado diversos informes donde muestra que los países con menor desigualdad registran un crecimiento mayor y más duradero; que las políticas fiscales se están volviendo menos redistributivas en la mayoría de los países; y que unas regulaciones e instituciones del mercado de trabajo más débiles, que se reflejan en el declive de la densidad sindical y la cobertura de la negociación colectiva, son los principales causantes de la creciente desigualdad en muchos países.

9. Sin embargo, la acción en los programas de créditos o el asesoramiento político a nivel de país no se ajustan a los estudios ni al discurso de las IFI respecto a la necesidad de reducir la desigualdad. Muchos programas o recomendaciones políticas del FMI siguen fomentando medidas que debilitan el salario mínimo, las regulaciones sobre protección del empleo o las instituciones de negociación colectiva. Por ejemplo, el Fondo ha alentado a muchos países a debilitar considerablemente o desmantelar la negociación colectiva sectorial, pese al papel que tienen unos sistemas coordinados de negociación colectiva para lograr una distribución de los ingresos más equitativa. En febrero de 2017, el informe de un Experto Independiente de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales presentado ante la 34ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentaba numerosos casos en que el FMI promovió reformas del mercado de trabajo relacionadas con la austeridad que erosionan los derechos de los trabajadores.² El informe indica que no hay pruebas de que las medidas desregulatorias, propuestas con el pretexto de prevenir o resolver la crisis de la deuda, hayan contribuido a una recuperación económica; en cambio sí que contribuyeron a aumentar la desigualdad.

10. Pese a la potencial contribución de la negociación coordinada o centralizada para reducir la desigualdad, la hostilidad del FMI hacia la negociación colectiva excepto a nivel de empresa ha quedado confirmada en el nuevo programa para Grecia, donde el Fondo se volvió a comprometer a acordar préstamos en julio de 2017, tras tres años de interrupción. Junto con la aprobación en principio de un nuevo crédito, la dirección del Fondo anunció su oposición a la intención expresa del Gobierno de restaurar la negociación sectorial tras finalizar el programa en agosto de 2018. La ampliación de los convenios colectivos al nivel sectorial quedó suspendida en 2011 por un Gobierno anterior, a instancias del FMI, dando como resultado el colapso de la cobertura de la negociación colectiva, pasando de un nivel estimado en el 70 por ciento antes de la crisis, en 2007, a apenas el 10 por ciento en 2015, en base a análisis de la OIT³. Unos salarios mínimos reducidos y recortes en las pensiones

² Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, A/HRC/34/57, 27 de diciembre de 2016 (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/57)

³ Organización Internacional del Trabajo, *Evaluating the effects of the structural labour market reforms on collective bargaining in Greece*, Diciembre de 2016 (http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_538161/lang--en/index.htm)

contribuyeron también a una distribución más desigual de los ingresos. El informe del Banco Mundial publicado el pasado mes de octubre, *La pobreza y la prosperidad compartida*, revelaba que, entre 2008 y 2013, Grecia obtuvo los peores resultados de todos los países examinados, en función de la bajada de ingresos del 40 por ciento menos pudiente.

11. Los progresos respecto a la desigualdad de ingresos y riqueza están interconectados con la igualdad de género, y los logros pueden reforzarse mutuamente. Superar la brecha salarial de género ayudaría a reducir la desigualdad de ingresos, pero para ello se requiere una intervención política coordinada basada en el programa de trabajo decente. Por sí sola, la creación de empleo puede perpetuar la desigualdad de género, cuando las mujeres han de afrontar la segregación profesional en sectores con bajos salarios dominados por empleos precarios, además de tener que seguir soportando la carga del trabajo no remunerado. La capacitación y la educación son importantes para reducir la segregación profesional, pero las políticas han de abordar además la cuestión de bajos salarios, trabajo precario, la economía informal y el trabajo no remunerado. Es algo que puede lograrse gracias a los derechos fundamentales en el trabajo, la protección social y el diálogo social. Resulta loable que el FMI haya empezado a examinar la desigualdad económica y de género, pero se requieren más medidas para integrar esos temas examinando la manera en que el asesoramiento político y las condiciones crediticias afectan a ambas formas de igualdad. La condicionalidad respecto a la consolidación fiscal y la supresión de salarios en el sector público resulta particularmente relevante. En cuanto al Banco Mundial, se requiere una estrategia de género más amplia, que vaya más allá de la iniciativa empresarial, el crecimiento del sector privado y la educación. Un enfoque integral haría frente a los problemas estructurales que afectan a toda la economía, como los bajos salarios y la brecha salarial, la segregación profesional y la informalidad.

Progresos hacia una protección social universal

12. El asesoramiento o la condicionalidad crediticia del FMI en el área de política social también han tenido consecuencias preocupantes sobre la desigualdad. Algunos programas del FMI incluyen un “piso de gasto social” como una de las Metas Cuantitativas Indicativas, aunque esto es algo puramente simbólico, dado que el hecho de no alcanzar una meta mínima de gasto no tiene efecto alguno sobre el desembolso de los créditos. Un reciente informe de la Oficina Independiente de Evaluación (OIE) del Fondo *El FMI y la Protección Social*, publicado en julio de 2017, reveló que el principal objetivo de la implicación del FMI en reformas de programas sociales ha sido controlar su costo fiscal, no mejorar su adecuación o cobertura. En muchos países, el Fondo ha apoyado una restringida focalización de los beneficios sociales, por ejemplo, reemplazando las prestaciones universales por subsidios al consumo con beneficios dirigidos a determinados grupos. Los mecanismos de “evaluación de medios indirecta” utilizados a menudo para establecer dicha focalización generalmente excluyen al 50 por ciento de aquellos que normalmente deberían ser elegibles en función de su nivel de ingresos, de acuerdo con un estudio publicado por la OIT. Las reformas de la protección social promovidas por las IFI, que dejan a la mayoría de la población que cuenta con bajos ingresos desprovista de cualquier tipo de asistencia, son incompatibles con los objetivos de reducción de la desigualdad y prosperidad compartida.

13. Las repercusiones negativas de ese tipo de políticas se han hecho sentir en los países prestatarios. En Túnez, que inició el primero de dos recientes programas crediticios del FMI en 2013, el gasto social al finalizar el primer programa sería inferior

en 14 por ciento al mínimo definido en el acuerdo inicial. Un informe del personal achacó la discrepancia a “problemas en los mecanismos de suministro” respecto a la “bien focalizada red de seguridad social” que supuestamente debería mitigar el impacto del incremento de los precios energéticos sobre la población con bajos ingresos. En un crédito a Mongolia aprobado en mayo de 2017, el FMI insistió en “mejorar la focalización” de los pagos nacionales por niño que sustituyeron a las anteriores prestaciones universales. Según un análisis efectuado por dos agencias de la ONU, el programa universal resultó particularmente eficaz para reducir la pobreza entre las familias rurales mongolas, muchas de las cuales no había recibido ningún beneficio en un anterior programa selectivo debido a “errores de exclusión asociados con la evaluación de medios indirecta”.⁴

14. El informe de la OIE confirma que el enfoque del FMI, favoreciendo la protección focalizada frente a la universal, lo sitúa en contradicción con la OIT, otras agencias de la ONU y el Banco Mundial, y pone en entredicho si dicho enfoque resulta compatible con su apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, el Banco lanzó en 2016 un programa conjunto con la OIT con el objetivo de incrementar el número de países con protección universal, una iniciativa adoptada en conformidad con su respaldo a los ODS y específicamente la meta 1.3 sobre protección social para todos. El Banco, que ha venido estando involucrado en varios sistemas problemáticos de protección focalizada, debería asegurarse de que en adelante sus programas cumplan la promesa de protección para todos, contribuyendo a establecer sistemas integrales basados, por ejemplo, en el piso de protección social desarrollado por la OIT. El FMI debería igualmente apoyar este enfoque, dando continuidad a la labor de investigación a nivel nacional en la que estuvo involucrado, con vistas a identificar espacio fiscal para los pisos de protección social.

Apoyar la construcción de capacidades a nivel nacional, no arriesgadas asociaciones público-privadas

15. A pesar de la creciente evidencia que apunta a las consecuencias negativas que tienen las asociaciones público-privadas, el Banco Mundial continúa promoviendo ese enfoque. Los recursos destinados a promover las APP deberían reencauzarse hacia inversiones públicas productivas y mejoras en la capacidad administrativa. Las APP y otros métodos encaminados a la progresión de la privatización han reducido el acceso asequible a servicios, endeudado a gobiernos con costos a largo plazo y convertido las necesidades básicas en beneficios privados. En América Latina, las revelaciones de soborno por parte de la constructora brasileña Odebrecht vinieron a demostrar que las APP pueden también constituir un entorno ideal para la corrupción. En 2014 y 2015, la Corporación Financiera Internacional adquirió acciones por valor de 15% además de aportar 61,3 millones USD a TCQ, empresa subsidiaria del gigante marítimo TCB creada para administrar un puerto en Guatemala, en el marco de una APP. Se reveló que la empresa había prometido millones de dólares en sobornos para obtener el contrato, incluyendo supuestos pagos a los entonces presidente y vicepresidente de Guatemala.

16. La actualización del Banco Mundial sobre la participación privada en infraestructura (PPI) correspondiente a 2016 muestra un declive en diversos frentes. Compara las cifras de 2016 con la media de 2011 a 2015: se registró un 41 por ciento menos de compromisos de inversión y el número de proyectos con PPI fue inferior en

⁴ Alianza Mundial para la protección social universal, “*The Universal Child Money Programme in Mongolia*”, 2016
(<http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53942>)

un 57 por ciento. Tan solo cinco economías emergentes y en desarrollo representaron el 69 por ciento de los compromisos de inversión, incluyendo 4.300 millones USD para una planta energética alimentada por carbón en Indonesia, diseñada con apoyo de la IFC. Pese a ese reciente descenso, el porcentaje de proyectos de PPI apoyados por los bancos multilaterales de desarrollo siguió invariable, debido en gran parte al liderazgo del Banco Mundial en la Alianza Global sobre Infraestructura y Conectividad y otras iniciativas, además de la prioridad acordada por el Banco a la promoción de las APP. Su utilización resulta particularmente dañina en servicios públicos básicos como educación, sanidad y distribución de agua. La imposición de tarifas, por bajas que sean, puede eliminar el acceso a dichos servicios para los más pobres y perjudicar el desarrollo humano. La calidad también ha sufrido, como en el caso de las Academias Internacionales Bridge, que se benefician de la participación financiera de la IFC.

17. El auténtico coste de una APP generalmente no aparece en los balances gubernamentales, lo que plantea un problema fundamental de falta de transparencia, y muchos contratos prevén ingresos garantizados a la entidad privada en caso de pasivos contingentes. La renegociación de los contratos de APP es habitual, dando como resultado costos adicionales no previstos que agotan las finanzas públicas, repercutiendo en la reducción de la pobreza. Los riesgos fiscales de las APP han sido puestos de relieve por el FMI y en ocasiones incluso reconocidos por el propio Banco Mundial. No obstante, las herramientas del Banco no brindan directivas claras para que se incluyan los costos en las hojas de balance y se lleven a cabo estudios comparativos con opciones públicas antes de escoger una APP.

18. La negociación y gestión de las APP por parte de los Gobiernos requieren una importante inversión en tiempo y recursos. Esto supone una carga para la capacidad administrativa del sector público, incluso en los países desarrollados, pero mucho más en países de bajos ingresos donde poderosas multinacionales hacen uso del desequilibrio de poder y conocimientos para manipular a los Gobiernos. En lugar de promover unas APP que generan beneficios a voraces multinacionales, el Banco Mundial debería concentrarse más bien en contribuir a aumentar las competencias nacionales en infraestructura social y física que promueva el desarrollo.

Mantener el compromiso con la acción climática

19. La retirada de EE.UU. del acuerdo de París sobre el clima representa un paso atrás, pero no elimina la responsabilidad y el compromiso del resto del mundo a la hora de hacer frente a esta grave amenaza a nuestro planeta. Las IFI deberían asumir un papel de liderazgo y manifestar su apoyo incondicional a los signatarios del acuerdo de París para ayudarles a alcanzar sus compromisos. Esto incluye la plena aplicación del Plan de Acción para el Clima del Banco Mundial para 2016-2020, diseñado para ayudar a los países a cumplir con los compromisos realizados en París, y el firme apoyo del FMI a la fiscalidad sobre las emisiones de carbono.

20. Una declaración del Banco Mundial de junio, reafirmando su compromiso con la acción climática es muy de agradecer y debería quedar plenamente reflejado en sus operaciones. Las seis áreas de este Plan de Acción –incluyendo la energía renovable, no dejar a nadie atrás y la sostenibilidad de ciudades y la movilidad– constituyen un sólido marco para apoyar a los países a cumplir con sus compromisos de París. La Agrupación Global Unions alienta al Banco a que promueva una transición justa para los trabajadores afectados por los proyectos y la planificación de políticas que tendrán lugar en base al Plan de Acción. De los trabajadores en las industrias fósiles a los

conductores informales de autobús, estos grupos han de tener voz y un lugar en la economía sostenible del futuro.

21. Pueden alcanzarse conjuntamente un acceso ampliado a la energía y el crecimiento de producción energética limpia. El apoyo de las IFI a proyectos de combustibles fósiles hace un flaco favor a los pobres y los trabajadores y trabajadoras, quienes tienen más que perder de las repercusiones del cambio climático. Desgraciadamente, hay pruebas fehacientes de que algunos préstamos para políticas de desarrollo (DPL por sus siglas en inglés) del Banco Mundial están vinculados a proyectos con combustibles fósiles. La Agrupación Global Unions apoya la importante labor llevada a cabo por el Banco para promover la energía renovable e insta a que el nuevo Marco Ambiental y Social se extienda también a los DPL, para asegurar la promoción de la sostenibilidad en todos los aspectos de los créditos. Una supervisión más estricta de la responsabilidad social y ambiental entre los intermediarios financieros en el sector privado mejoraría también la promoción de las energías renovables.

22. Espacio fiscal y planificación resultan cruciales para la mitigación del cambio climático y una transición justa. El FMI puede contribuir a esta labor y ayudar a establecer soluciones, incluyendo los impuestos sobre el carbono, un enfoque que debería pasar rápidamente de la teoría a la acción. La participación del FMI y el Banco Mundial en la Coalición para la Tarificación del Carbono resulta productiva y debería continuar. La Comisión de Alto Nivel sobre la Tarificación del Carbono concluyó que los ingresos provenientes de la tarificación “pueden emplearse para fomentar el crecimiento de forma equitativa, revirtiendo los ingresos en descuentos a los hogares, apoyando a las secciones más pobres de la población, gestionando cambios de transición, invirtiendo en infraestructura baja en carbono y promoviendo el cambio tecnológico”. La protección social universal será también clave para la resiliencia ante los efectos del cambio climático. El camino hasta el acuerdo de París fue difícil, pero prevaleció la cooperación internacional. Las IFI han de perseverar brindando asistencia a los Gobiernos de los países miembros a responder a los desafíos del cambio climático.

Cooperación para implementar la nueva salvaguardia laboral del Banco Mundial

23. Si se respetan los planes anunciados por el Banco Mundial, en 2018 se unirá a los muchos otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que, en el transcurso de los últimos años, han venido aplicando exhaustivos requisitos o salvaguardias en relación con las normas del trabajo. “La Norma Ambiental y Social 2: Mano de obra y condiciones de trabajo” (NAS 2) forma parte del nuevo *Marco Ambiental y Social* (MAS), adoptado por el Banco en agosto de 2016. NAS 2 establece requisitos básicos de salud y seguridad en el trabajo, la obligación de facilitar información a los trabajadores y el requisito de respetar ciertos derechos fundamentales de los trabajadores.

24. La introducción por parte del Banco Mundial de una salvaguardia laboral es un paso importante, pero su eficacia podría verse reducida por el hecho de que en algunos aspectos esa versión es más débil que las de los otros BMD, por ejemplo al no incluir una referencia a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Para evitar que las deficiencias o las ambigüedades existentes en la NAS 2 reviertan en tolerancia hacia prácticas laborales inaceptables o denegación de los derechos de los trabajadores en actividades financiadas por el Banco, resulta imperativo que el Banco coopere estrechamente con la OIT y los sindicatos, que son las partes más informadas sobre las condiciones laborales en sus proyectos y programas.

25. Un área prometedora para la cooperación es la aplicación de las disposiciones de la NAS 2 relativas a los trabajadores en los principales proveedores, que estipulan que los prestatarios tomen medidas para asegurarse de la ausencia de trabajo forzoso, trabajo infantil y problemas graves de seguridad en sus cadenas de suministros. La OIT mantuvo una importante discusión durante la Conferencia de 2016 sobre la promoción del trabajo decente en las cadenas de suministros, pidiendo específicamente la colaboración con las IFI para avanzar al respecto.

26. El Banco debería mejorar su cooperación con los sindicatos y la OIT al elaborar directivas para su personal, material de formación, mecanismos de control y procedimientos de consultas para la implementación de la NAS 2. El Banco debería asimismo examinar posibilidades de trabajar conjuntamente con otros BMD que tienen años de experiencia previa en la implementación de salvaguardias laborales. El trabajo conjunto podría tener lugar, por ejemplo, en la formación de personal y directores de proyectos sobre los requisitos sobre normas del trabajo, y en el establecimiento de procedimientos efectivos de supervisión y compilación de información para identificar riesgos de violaciones de las salvaguardias.

27. El próximo paso para avanzar a la hora de garantizar que todas las actividades financiadas por el Grupo del Banco Mundial sean social y medioambientalmente sostenibles, sería extender la aplicación de salvaguardias a aquellas inversiones para las que no se aplican las Normas de Desempeño de la IFC o al MAS, o donde el Grupo asume una responsabilidad limitada para validar su cumplimiento. Nos preocupan particularmente los DPL contraídos por las agencias del Banco para el sector público (BIRF y AIF) y las actividades financiadas por la IFC a través de intermediarios financieros privados. Aunque estos últimos, en teoría, deberían asegurarse de que los proyectos finales guarden conformidad con las Normas de Desempeño, en la práctica la IFC no dispone de un sistema para controlar el cumplimiento o responder a cualquier reclamación de incumplimiento.

Recomendaciones de la Agrupación Global Unions

Medidas para apoyar una prosperidad compartida y el trabajo decente

28. El FMI y el Banco Mundial deberían

- Apoyar los esfuerzos para revertir la creciente desigualdad de ingresos y recuperar la pérdida de la participación del trabajo en los ingresos nacionales, por medio de inversión pública e incrementos salariales coordinados. Poner fin a la promoción de la desregulación del mercado de trabajo y la supresión de salarios, incluso a través de la condicionalidad a la financiación. En su lugar, contribuir a reforzar el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones del mercado de trabajo. Incrementos salariales e inversión en servicios públicos, particularmente en la economía de cuidados, impulsarían el empoderamiento económico de la mujer.
- Contribuir a inversiones públicas en servicios públicos de calidad e infraestructura sostenible. Las IFI deberían ayudar a los países a reforzar la capacidad administrativa y dejar de lado las asociaciones público-privadas que imponen a largo plazo una carga sobre las finanzas públicas además de socavar el acceso a servicios básicos.

- Asegurarse de que todas sus operaciones contribuyan a reducir las desigualdades, examinando el posible efecto de su asesoramiento político, créditos y condicionalidad respecto a la igualdad económica y de género. La cuestión de la desigualdad no debería tratarse como un tema aislado, sino como un aspecto crucial que se ve afectado por toda una serie de acciones de las IFI.
- Ayudar a los países a establecer políticas fiscales que reduzcan la desigualdad por medio de regímenes fiscales más progresivos y que promuevan la realización de la protección social universal.
- Respetar el acuerdo de París sobre el clima brindando asesoramiento y financiación que permitan a los países cumplir cabalmente con sus compromisos de reducción de emisiones y facilitar una transición justa hacia una economía sostenible. Centrarse en la energía renovable y la sostenibilidad, rechazando nuevos proyectos con combustibles fósiles que intensificarían el problema del cambio climático.
- Llevar a cabo acciones que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen metas sobre el empleo pleno y productivo, la protección de los derechos de los trabajadores, la reducción de la desigualdad, cobertura sanitaria universal, educación primaria y secundaria universal, y sistemas nacionales de protección social para todos.
- Apoyar la inclusión, en los acuerdos comerciales y de inversión, de disposiciones laborales vinculantes basadas en las normas de la OIT, y derogar los mecanismos de solución de conflictos inversor-Estado que socavan el derecho de los Gobiernos a regular.

29. El Banco Mundial debería

- Asegurarse de que sus proyectos y programas respeten los derechos fundamentales de los trabajadores/as y proporcionen condiciones de trabajo seguras y salarios adecuados. Trabajar conjuntamente con los sindicatos y la OIT en la implementación de su “Norma Ambiental y Social 2: Mano de obra y condiciones de trabajo” para asegurarse de que todas las actividades financiadas por el Banco guarden conformidad con las normas del trabajo reconocidas internacionalmente, incluyendo la identificación de proyectos con alto riesgo de incumplimiento y el control del cumplimiento.
- Examinar posibilidades de trabajar conjuntamente con otros BMD que han adoptado ya salvaguardias laborales, para su implementación, por ejemplo en actividades de formación y para el desarrollo de procedimientos efectivos de supervisión.
- Como un paso adicional, asegurarse de que se aplique la salvaguardia laboral y se supervise su cumplimiento en todas las actividades financiadas por el Grupo del Banco Mundial, incluyendo la financiación para políticas de desarrollo y los programas por resultados, así como proyectos financiados por la IFC a través de intermediarios financieros.

Medidas para una regulación financiera y una fiscalidad efectivas

30. El FMI debería

- Apoyar la ampliación y realización, y oponerse a cualquier marcha atrás, de las medidas adoptadas desde 2008 para corregir la falta de regulación del sector financiero, incluyendo los sistemas bancarios en la sombra, los grupos demasiado grandes para quebrar, y el bajo nivel de imposición del sector financiero.
- Apoyar la creación de un marco multilateral para la negociación de acuerdos internacionales vinculantes para la restructuración de la deuda cuando los países se enfrenten a una deuda soberana insostenible.
- Promover medidas más firmes para contrarrestar la erosión de las bases impositivas e introducir una reforma de los sistemas fiscales, a fin de lograr una base más amplia y una fiscalidad más progresiva, y para transferir la carga impositiva del empleo a las actividades no productivas y que destruyen el medio ambiente, incluyendo una tarificación del carbono.
- Fomentar medidas más firmes para asegurar que los ingresos no se pierdan en paraísos fiscales, exigiendo el intercambio automático de datos e información entre países, y acciones para poner fin a la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios por parte de las empresas multinacionales.
- Apoyar la introducción de impuestos sobre las transacciones financieras para desalentar el comportamiento especulativo y crear nuevas fuentes de financiación.

09-09 -17